



— REPÚBLICA H —

#OPINIÓN



SOFÍA
GARCÍA

VILLEGAS, MÁS OPERADOR, MENOS GOBERNADOR

Recursos públicos, vehículos oficiales y funcionarios trabajan de forma paralela para operar políticamente a favor del PRI

Durango atraviesa una crisis silenciosa. Las extorsiones aumentan, el cobro de piso se normaliza y el miedo se apodera de zonas como Gómez Palacio y La Laguna. Organizaciones como México SOS, el Consejo Cívico de las Instituciones y la Mesa Ciudadana de Seguridad han alzado la voz: acusan omisión, inacción y abandono. Mientras la delincuencia avanza, el gobernador Esteban Villegas parece más preocupado por cuidar el resultado electoral del próximo 1 de junio que por atender la emergencia.

Incluso, fuentes dentro de su administración confirman que personal del gobierno estatal ha sido comisionado para operar las campañas municipales en zonas clave como Durango capital, Lerdo y Gómez Palacio. Recursos públicos, vehículos oficiales y funcionarios de la nómina estatal trabajan de forma paralela, no para reforzar la seguridad ni para contener el avance del crimen, sino para operar políticamente a favor del PRI.

Y mientras eso ocurre, las condiciones de seguridad se deterioran con rapidez. En un posicionamiento reciente, las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que, en Gómez Palacio, la situación es alarmante: extorsiones abiertas al sector agrícola, amenazas y apropiación de la cadena de comercialización por parte de un grupo sindical operando con total impunidad.

La erosión del estado de derecho en la Comarca Lagunera es real. Lo que antes funcionaba gracias a la cooperación entre gobiernos y fuerzas de seguridad, hoy se

ha dejado caer por desidia, intereses políticos y falta de liderazgo. Las organizaciones han sido claras: recuperar esa coordinación no es sólo urgente, es indispensable. Porque mientras Villegas juega a las elecciones, Durango se descompone.

CONDICIONA MORENISTA GUANAJUATENSE PENSIÓN ALIMENTARIA. El 28 de febrero se documentó en este espacio que el diputado de Morena Ernesto Prieto Gallardo, fue exhibido por colectivos feministas por incumplir con la pensión alimenticia de su hija. La protesta

llegó hasta la Cámara de Diputados con un tendadero el 8 de marzo. Tras la presión pública, el legislador hizo público que cumplía con su obligación y el pago de una pensión mínima de 8 mil pesos mensuales, muy por debajo de lo que establece la ley con base en su salario.

Ahora, en plena disputa legal, Prieto condiciona el cumplimiento de esa pensión a que la madre de la menor le ofrezca una disculpa pública. Como si los derechos de una niña dependieran del ego político de su padre. Incluso ha advertido que solicitará la patria potestad si una prueba de ADN -programada para el 30 de mayo- confirma la paternidad.

Desde su propio partido, el vocero Arturo Ávila ha marcado distancia: ningún argumento político justifica condicionar derechos ni ejercer violencia mediática contra las mujeres.

Nos vemos a las 8 por el 8

@SOFIAGARCIA MX